

Minería

13

El difícil y errático recorrido del proyecto Alumysa

En enero de 1995, Proyectos de Aysén vendió sus derechos sobre la iniciativa denominada Proyecto Alumysa al consorcio formado por Alumysa Joint Ventures y la transnacional Noranda. El proyecto contemplaba una inversión de más de 1.600 millones de dólares y consistía en la construcción de una central hidroeléctrica de 360 MW en el sector de río Cuervo, Provincia de Aysén, destinada a alimentar de energía eléctrica a una planta de reducción de aluminio y, adicionalmente, contemplaba la construcción de un puerto mecanizado para descargar materias primas para la producción de aluminio y carga del metal producido.

En este contexto, en marzo de 1995 se informó al medio nacional a través del Diario Oficial que la sociedad Proyecto Alumysa S.A. había decidido someter voluntariamente el "Proyecto Alumysa" al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.

En agosto de 1995, Robert Biehl, gerente general de Alumysa, señalaba que la compañía estaba dedicada a elaborar el estudio de ingeniería y de impacto ambiental del proyecto. Biehl detallaba a la prensa las medidas ambientales del proyecto asegurando que se aplicarían medidas de primer nivel, cumpliendo así con los estándares ambientales más exigentes y estrictos, por lo que calificaba como "falsedades, infundios y acusaciones difamatorias" las críticas que habían formulado CODEFF y otras organizaciones ecologistas quienes reclamaban por el bajo costo de la compra de las tierras donde se realizaría el proyecto y afirmaban que la refinación de aluminio tenía serios riesgos de contaminación del aire, las tierras y el agua del fiordo de Aysén, una zona aún prístina, que cambiaría la percepción de virginidad que existe sobre la región.

Por otra parte, Sergio Vergara, Subsecretario de Bienes Nacionales, señalaba que lo que interesaba verdaderamente al país era, además de cuidar el medio ambiente, "facilitar en ciertas regiones el desarrollo de empresas, entidades que den estabilidad, que den empleo, que permitan poblar el territorio".

No obstante, Peter Martmann, representante de CODEFF en Aysén, se preguntaba si existía algún ecosistema capaz de absorber la tremenda cantidad de materiales tóxicos que generaría el proyecto Alumysa. Para Martmann el interés de Noranda en Aysén era por que había energía a muy bajo costo, considerando que un enclave económico como Alumysa difícilmente constituiría un beneficio para la zona.

A principios de octubre de 1995, parlamentarios verdes y grupos ecologistas solicitaron una investigación acabada e insistieron en rechazar el proyecto Alumysa ya que consideraban que el proyecto dejaría 350.000 toneladas al año de residuos tóxicos y peligrosos como cianuro, fluoruro, hidrocarburos aromáticos y monóxido de carbono, contaminando las aguas y el aire de la zona. Afirmando además que Noranda tenía un amplio prontuario ambiental en Estados Unidos y Canadá por diversas infracciones.

En este contexto, la empresa Noranda anunció la suspensión no definitiva del desarrollo del proyecto Alumysa en Chile pues se consideraba que "la proyección del retorno sobre la inversión da al proyecto una prioridad menor que otras oportunidades importantes de expansión del grupo Noranda". Este anuncio fue calificado como "inquietante" por la Intendente de la Región de Aysén Silvia Moreno quien estimaba que "había cifradas esperanzas en que la iniciativa produciría un rápido desarrollo para Aysén".

Sin embargo, en Febrero de 1996, Noranda estaba negociando la posibilidad de formar un consorcio con la empresa australiana Comalco para desarrollar el proyecto, señalando a la prensa que por el momento el proyecto sólo se había retrasado mientras se concretaba una alianza estratégica con algún socio interesado en el proyecto.

La materialización del consorcio Noranda-Comalco se anunció en agosto de 1996, a partir de un acuerdo según el cual Comalco compraría el 50% de la propiedad del proyecto de aluminio en la región de Aysén. Ambas empresas esperaban tomar la decisión de realizar el proyecto a mediados de 1997, una vez que se concluyeran los estudios de factibilidad.

Anticipándose a las reacciones ecologistas Robert Biehl afirmaba en septiembre de 1996 que Alumysa era un proyecto no contaminante. En este contexto el ejecutivo señalaba "no habrá contaminación a ríos porque no verteremos agua a ellos; las emisiones de flúor serán tan controladas como nuestro modelo, la planta de aluminio en Australia, que ha sido premiada por organizaciones ambientalistas y celebrada por Greenpeace; los beneficios a Chile no sólo serán económicos, sino que permitirá dar empleo permanente a más de mil habitantes de una zona actualmente deprimida y favorecerá notablemente el turismo. A su juicio, las críticas al proyecto se debían a la desinformación que existía entre los grupos ecologistas y algunos parlamentarios.

Para Manuel Baquedano una planta de aluminio en la región iba a "lesionar seriamente el desarrollo de Aysén como región favorable al ecoturismo y a sus empresas como la salmonífera".

En julio de 1997 Noranda continuaba con la búsqueda de un socio estratégico con el cual sacar adelante el proyecto. No obstante anunciaba que a principios de 1998 estaría en condiciones de presentar a la COREMA de la región de Aysén el Estudio de Impacto Ambiental que verificaría la viabilidad ambiental del proyecto.

Así, después de todas las dificultades encontradas el grupo económico canadiense se mantenía empeñado en sacar adelante el proyecto. Los grupos ecologistas, por su parte, seguían intentado detenerlo. La última palabra, por supuesto, la tendría la COREMA de la región de Aysén, aún cuando se distaba mucho de tener un estudio y una opinión formada y acabada sobre el tema. Como siempre unos estaban absolutamente convencidos de las bondades del proyecto y los otros de sus defectos e impactos no mitigables ni compensables.